

DECLARACIÓN COLECTIVA SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Diseñado para ser utilizado en octubre / noviembre de 2025 en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Qatar / COP30 en Brasil, las negociaciones fiscales de la ONU en Kenia y el G20 en Sudáfrica

Si está de acuerdo en firmar esta declaración colectiva, agregue el nombre de su organización al final, idealmente antes del 31 de octubre, para que podamos comenzar a distribuirla y usarla a partir del 3 de noviembre. Esperamos que las organizaciones que firmen puedan poner la declaración en su sitio web y compartirla ampliamente en las redes sociales. Si puede ayudarnos con la traducción, háganoslo saber a continuación. Si tiene alguna edición final de línea roja, marque a david.archer@actionaid.org.

Los servicios públicos son la base de un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. El acceso universal a la educación, la salud, la protección social, el agua y el saneamiento de calidad desarrolla las capacidades humanas, reduce la desigualdad y fortalece el contrato social entre los gobiernos y la ciudadanía. Por el contrario, la falta de inversión o la privatización a menudo conducen a la exclusión, la desigualdad y la erosión de los derechos. Los servicios sólidos, financiados con fondos públicos y responsables son tanto un imperativo moral como una inversión estratégica, fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cumplir los derechos humanos, promover la igualdad de género y racial y construir economías resilientes capaces de resistir futuras crisis.

Sin embargo, las políticas nacionales y globales a menudo no hacen justicia a la criticidad de los servicios públicos. La ola de protestas lideradas por jóvenes en varios países hoy en día refleja una frustración generalizada a medida que los ciudadanos desafían la falta de financiación de la educación, la salud, los servicios públicos y la protección social impulsada por la austeridad, exigiendo que los gobiernos restauren y amplíen la prestación de servicios públicos de calidad financiados con fondos públicos. Si queremos avanzar para garantizar que [nuestro futuro sea público](#), debemos presentar este caso enérgicamente en la serie de procesos de políticas globales que tendrán lugar en noviembre de 2025, en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (CMD2) en Qatar, las negociaciones de la Convención Fiscal de la ONU en Kenia, la Conferencia sobre el Clima COP30 en Brasil y la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica.

Necesitamos basarnos en el [Compromiso de Sevilla](#), el resultado de la cuarta Cumbre de Financiación para el Desarrollo de la ONU en julio de 2025. Esto reconoce el importante papel de "recursos, políticas y planes públicos", pero no logra articular una visión clara de la financiación de servicios públicos universales, sensibles al género y de alta calidad que puedan responder al desafío climático.

La [Declaración Política de Doha de la](#) CMD2 ofrece un lenguaje fuerte, que incluye el reconocimiento del papel crucial de la prestación de servicios públicos en "reconocer, reducir y redistribuir la participación desproporcionada de las mujeres en el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico". Sin embargo, se necesita mucha más atención e inversión para abordar los

desafíos reales que enfrentan los servicios públicos y la fuerza laboral del sector público, y para poner los servicios públicos en el centro de la construcción de un futuro justo y sostenible. La privatización presenta riesgos claros para los servicios públicos y es preocupante que la Declaración considere acríticamente las asociaciones público-privadas como un instrumento de reforma de la salud.

El G20 podría y debería poner un enfoque renovado en la reducción de la desigualdad, hacer retroceder las amenazas planteadas por el financiamiento de la atención médica y ayudar a abordar algunas de las limitaciones financieras (a través de medidas más audaces sobre impuestos y deuda). Finalmente, la COP30 en Belém, Brasil, podría integrar los servicios públicos en el centro de los acuerdos en torno a una "transición justa".

Las recientes reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (en octubre de 2025) revelan continuas contradicciones. A pesar de que 54 países están en crisis de deuda, el FMI se niega a reconocer esta realidad, ya que solo declararán una crisis si no se les paga a los acreedores. Las personas que mueren por falta de atención médica o los niños y las niñas a quienes se les niega la educación debido a la falta de fondos en las escuelas no parecen plantear una crisis para el FMI. Hay que pensar de otra manera. Hacerlo es particularmente importante en este momento en que el FMI está revisando el diseño y la condicionalidad de su programa. Debemos exponer lo absurdo de que el [FMI sugiera](#) que los gobiernos deben recortar las facturas salariales del sector público para aumentar el gasto social en salud y educación, cuando la realidad es que nada es más importante que gastar en la fuerza laboral de primera línea de docentes, enfermeras/os, parteras/os, trabajadoras/es de atención comunitaria y médicas/os, la mayoría de los cuales son mujeres.

Los defensores y las defensoras de los servicios públicos deben hacer algunas demandas comunes clave en estos diversos foros internacionales en noviembre de 2025, ya sea en procesos de negociación formales o informales, paneles de conferencias, reuniones paralelas, blogs o comunicaciones en redes sociales:

- La transformación de los servicios públicos debe ser fundamental para construir un nuevo contrato social y garantizar el desarrollo sostenible, especialmente a la luz de la crisis climática. Los Estados y los actores internacionales deben reconocer que el apoyo integral a los servicios públicos es fundamental para la justicia económica y social y la "justicia" involucrada en una "transición justa".
- Los servicios públicos necesitan financiación pública sostenible y deben estar en el centro de los presupuestos nacionales. A la luz de las disminuciones en la ayuda y la escala de la crisis de la deuda, cada gobierno debe priorizar la financiación pública de sus propios ingresos fiscales, aumentando audazmente las relaciones entre impuestos y PIB a través de reformas fiscales progresivas y sensibles al género que aborden las desigualdades en los ingresos, la riqueza y el uso del tiempo.

- Los gobiernos deben rechazar las problemáticas políticas de "financiación privada primero" para la financiación del desarrollo. Las subvenciones y los préstamos en condiciones favorables deben reforzar los sistemas públicos y los servicios públicos en lugar de financiar la prestación paralela, privada, proyectada o fragmentada.
- Los gobiernos deben detener la privatización, la comercialización y el financiamiento de los servicios públicos esenciales, como la salud, la educación, el agua, la atención y la protección social, en particular a la espera de evaluaciones de impacto en los derechos humanos y pruebas de beneficio público.
- Los gobiernos deben invertir en los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos como una inversión fundamental en los derechos de la ciudadanía. El financiamiento sostenible de la fuerza laboral del sector público debe ser una prioridad, resistiendo las presiones del FMI para reducir o congelar las facturas salariales totales y planificando activamente aumentar el porcentaje del PIB gastado en la factura salarial después de años de austeridad innecesaria y perjudicial.
- Se requieren medidas nacionales y mundiales para abordar la crisis de la deuda, que está socavando el gasto en servicios públicos, dado que el 75% de los países de bajos ingresos gastan más en el servicio de la deuda que en salud, y el 50% gasta más en deuda que en educación. Tenemos que reconocer que la arquitectura de la deuda existente (incluido el Marco Común del G20) es injusta e ineficaz, sirve a los intereses de los acreedores ricos e ignora las crisis que enfrentan los países en crisis de deuda, a menudo sin culpa propia.
- Todos los países deben establecer objetivos mensurables para la reducción de la desigualdad y comprometerse a convertir en realidad la retórica de "no dejar a nadie atrás" para quienes viven en la pobreza, enfrentan la exclusión y la discriminación intersectorial. Esto implica garantizar que los servicios públicos y la protección social estén realmente disponibles universalmente. Necesitamos hacer retroceder el financiamiento de la salud y otros servicios y desafiar la protección social dirigida en lugar de la universal, que sigue siendo impulsada por el G20 y el FMI.
- Los gobiernos deben afirmar que la justicia climática depende de servicios sólidos financiados con fondos públicos y comprometerse a garantizar que la financiación climática apoye la expansión y la resiliencia de los servicios esenciales prestados públicamente, reconociendo que el acceso universal a los sistemas de salud, educación, protección social y agua es indispensable para lograr la justicia climática y el desarrollo sostenible.

Avanzar en los servicios públicos requiere una acción tanto nacional como internacional. A nivel nacional, quienes trabajan en educación, salud, agua, energía, cuidado, transporte, protección social, vivienda y agricultura deben unirse para exigir que los gobiernos se comprometan con una visión integral del papel de los servicios públicos. A la luz de las incertidumbres globales, los

aranceles comerciales, los recortes en la ayuda y las tasas de interés injustas que desencadenan crisis de deuda, y frente a la demanda popular de volver a comprometerse con la idea del estado de bienestar en muchos países de todo el mundo, ahora es el momento de unir las luchas para exigir que los gobiernos sean proactivos, reclamen la soberanía sobre la toma de decisiones económicas y promuevan procesos inclusivos y democráticos para reconstruir un contrato social basado en bienes y servicios públicos.

A nivel internacional, las reformas de la arquitectura financiera mundial son cruciales para posibilitar la financiación sostenible de los servicios públicos. Uno de los avances más importantes radica en el trabajo que se está realizando para construir una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Impuestos, con las negociaciones en curso en Nairobi en noviembre de 2025 y la esperanza de que se establezca una convención final sólida para 2027. Esto cambiará el poder sobre la elaboración y aplicación de normas fiscales globales del club de naciones ricas de la OCDE a un espacio de la ONU representativo e inclusivo. Las normas mundiales más justas y el fortalecimiento de la coordinación fiscal internacional son fundamentales para que los países generen ingresos fiscales nacionales más altos y predecibles, que son requisitos previos fundamentales para la financiación sostenible de los servicios públicos universales. Mientras tanto, el G20 en Sudáfrica puede ayudar a lograr avances en la tributación efectiva de las personas de alta riqueza neta, iniciada el año pasado en virtud de un acuerdo histórico en el G20 de Brasil, para abordar la desigualdad extrema de riqueza, incluida la desigualdad de género y racial.

También tenemos una necesidad urgente de cambiar la arquitectura global de la deuda, alejando el poder del FMI y de los procesos ad hoc dirigidos por los acreedores que impulsan la imposición de la austeridad. Necesitamos una arquitectura más representativa e inclusiva para abordar las crisis de deuda, una que salvaguarde sistemáticamente el espacio fiscal, la equidad y la autonomía política que los gobiernos necesitan para ofrecer servicios públicos universales y de alta calidad. El llamamiento central de las naciones africanas en la conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo fue a favor de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana. Esto fue bloqueado por las naciones europeas ya que el resultado de la FFD4 tenía que ser un documento de consenso. Pero ahora hay un impulso para llevar el caso de una Convención sobre la Deuda a votación en la Asamblea General de la ONU en 2026. Quienes se preocupan por el futuro de los servicios públicos deben apoyar enérgicamente tales cambios en la arquitectura internacional, para romper el dominio colonial y patriarcal que ha socavado los servicios públicos durante una generación o más.

En este año, cuando celebramos el 80 aniversario de las Naciones Unidas, debemos reafirmar la centralidad de los servicios públicos para el logro de los derechos humanos y la igualdad de género. Es hora de celebrar el espacio inclusivo presentado por la Asamblea General de la ONU y los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, al tiempo que se desafían las continuas tendencias coloniales de instituciones globales como el FMI y el Banco Mundial. Necesitamos procesos representativos e inclusivos a nivel nacional e internacional, y necesitamos construir un multilateralismo más justo. Cuando las voces de las personas se escuchan adecuadamente, se valoran y apoyan los servicios públicos universales.

FIRMAS: agregue el nombre de su organización

1. ActionAid International
2. Amnesty International
3. Biozid Climate Institute, Bangladesh, www.biozid-climate.com
4. Free Trade Union Development Centre, Sri Lanka
5. Sri Lanka Pre School Teachers' Association
6. Global Student Forum
7. World Organization for Early Childhood Education - OMEP
8. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación- CLADE
9. RTE Forum, India
10. Right to Education Initiative
11. PeaceCast TV
12. Arab Campaign for Education
13. Polifa
14. INESC - Instituto de Estudos Socioeconômicos, Brazil
15. Grupo de Mujeres de la Argentina
16. Global Campaign for Education - GCE
17. Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR)
18. Portuguese Platform of Development NGOs
19. Organisation d'Appui aux Jeunes Opérateurs Economiques pour la Gouvernance Locale (OJEG) , Sénégal
20. Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (CHIMUMI) from México.
21. We, The World Botswana
22. The People's Fund for Global Health and Development
23. Olabode Youth and Women Initiatives (OYAWIN)
24. "All for Education!" National Civil Society Coalition, Mongolia
25. Bearing in mind action to save life initiative (BAL)
26. Wemos, Netherlands
27. Association for Promotion of Sustainable Development, IndiaInstitute for Economic Justice, South Africa
28. Institute of the Blessed Virgin Mary - Loreto Generalate
29. Intercontinental Network for the Promotion of Social Solidarity Economy (RIPESS)
30. WEED - World Economy, Ecology & Development
31. Treatment Action Group (TAG)
32. Partners In Health